

PRECISIONES PARA EL DEBATE ECONOMICO

En nuestro número de junio pasado, bajo el título "Definiciones económicas indispensables", presentamos editorialmente un panorama general de la estructuración de la actividad económica en Chile, haciendo especial hincapié en la necesidad de distinguir las partes del todo, o bien —desde otro punto de vista— los medios de los fines. Así decíamos que resulta indispensable separar en su realidad específica lo que constituye el **sistema económico** que Chile ha decidido llevar adelante, de las **políticas** y de los **instrumentos** que se utilicen para alcanzar la meta propuesta. De tal manera, mientras el primero necesariamente es intransable —porque forma parte de las definiciones básicas del régimen— las segundas y los terceros son modificables cuando la nueva realidad así lo requiera y en la medida en que estén en armonía con el sistema general perseguido. ►

El presente artículo editorial pretende ser una continuación del anterior que comentamos, a la luz ahora del debate económico nacional reciente.

Sólo en años recientes, y específicamente durante este Gobierno, los economistas han asumido un papel preponderante en la estructuración de una política económica general, así como de políticas específicas en diversos campos como el arancelario, tributario, monetario, de decisiones de inversiones públicas y otros de naturaleza similar. Asimismo han tenido una participación decisiva en la aplicación de esas políticas, la evaluación de sus resultados y los ajustes que se han estimado necesarios.

Al comienzo de la labor económica del actual Gobierno, y definida en la esfera política la decisión de implantar en el país un sistema de economía social de mercado, el diagnóstico técnico era relativamente simple dadas las enormes distorsiones que existían en ese momento. No fue difícil entonces que se llegara a un grado aceptable de consenso entre los técnicos respecto de las medidas que se debían tomar, tanto para estructurar las bases de una economía libre, como para sacar al país del caos económico en que se encontraba. Una inflación de 500 a 1.000% acompañada de un déficit del sector público igual al 25% del producto nacional, indicaba con claridad meridiana que era indispensable moverse en el sentido de equilibrar las cuentas fiscales y públicas. Una situación de precios relativos en que un saco de cemento vacío costaba menos que el mismo lleno, insinuaba una fuerte presunción de que sólo un mayor grado de libertad de precios podía corregir el desequilibrio en un período de tiempo razonable. Una estructura arancelaria con tasas del 200% en el rango normal, era incom-

patible con el deseo de tener una economía abierta al mundo que permitiera a los chilenos tener acceso a bienes de calidad internacional y a precios adecuados, y que a través de la competencia estimulara un mayor nivel de eficiencia en los productores nacionales. Otras distorsiones, de magnitudes similares, permitían también obtener un rápido consenso en su diagnóstico entre los profesionales de la economía.

El país se acostumbró así a escuchar, de parte de los economistas que adherían a un esquema de economía libre regida fundamentalmente por el mercado, voces que parecían provenir de un coro bien afiatado con un nivel de unidad raras veces visto en un equipo de Gobierno. Incluso llegó a ser exasperante para muchos escuchar respuestas similares provenientes de personas distintas que, sin embargo, parecían actuar con un alto nivel de coordinación y disciplina. Lo que estas personas no entendían era que la coordinación era sólo fruto de una forma común de analizar, enraizada en el conocimiento de la teoría económica moderna, y que la disciplina era la propia del rigor científico y no la de un grupo sometido a una autoridad que imponía fórmulas y argumentos.

Los tiempos han cambiado. El trabajo estructural ya fue realizado y el nivel de opciones técnicas se ha elevado a regiones en que la unanimidad, aún la de profesionales de una ciencia, ya no se encuentra con similar facilidad. Dentro del marco doctrinario de una economía libre caben opciones técnicas que no siempre logran imponerse en el plano de las argumentaciones racionales y que sólo la aplicación de algunas de ellas, con cautela y vigilancia, es capaz de ir indicando cuáles responden mejor a determinadas circunstancias de tiempo y lugar. El pasado reciente puede in-

ducir a error o confusión. Los economistas en todo el mundo discrepan, lo cual no invalida el carácter científico de la economía, sino que sólo indica que aún hay mucho por conocer en este campo de conocimiento. En los grandes centros universitarios del mundo se desarrollan hoy debates intelectuales ya largos, y no siempre muy pacíficos, entre distintas corrientes que pueden exhibir entre sus adherentes a ganadores del Premio Nobel en Economía. En un campo más cercano a nuestra vida diaria no es poco frecuente que se encuentre que dos médicos discrepan en torno al tratamiento a seguir con un paciente específico —lo que hace que la discrepancia sea lo más alejada al plano teórico— llegando a plantearse en torno a un ser de carne y hueso y habiendo en juego incluso una vida humana. Estas discrepancias no niegan el carácter científico de la biología, sólo reflejan el grado de desconocimiento que aún existe, o las apreciaciones humanas interminablemente diversas frente a un mismo hecho. Sin embargo, un gobierno debe optar por alguna de las opciones técnicas que tenga frente a un determinado asunto. No basta decir que varias de ellas pueden ser válidas. En el mundo académico esto es posible, pero en el gobierno de un país no lo es. Se

debe optar, se debe tomar una decisión y llevar adelante una política con convicción, con seguridad y a veces aún con audacia. Pero en el ámbito interior del gobierno debe continuar el análisis, el estudio permanente de los resultados que se obtienen y así estar pronto a efectuar los ajustes que la evidencia sugiera y la prudencia aconseje. La acción del Gobierno no debe dejar duda de su intención de aplicar la política escogida, pero es previsible que fuera de él, aún entre sus partidarios, surgirán voces discrepantes y se abrirá un permanente debate.

El país deberá, en el futuro inmediato, aceptar que el camino recorrido en la estructuración de una economía libre obliga a vivir una nueva etapa que exige mayor madurez, donde la discrepancia entre técnicos que persiguen fines comunes será cada vez más frecuente, y que el debate se hace también tanto más necesario en cuanto las decisiones se hacen más complejas y el manejo necesario más fino. El debate no sólo ayudará a mejorar la calidad de las decisiones técnicas sino que contribuirá significativamente a ejercitar la tolerancia y la capacidad de escuchar otros puntos de vista, lo que es propio de una sociedad libre.

R